

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

Medellín, dos (02) de agosto dos mil veintitrés (2023)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por los Magistrados Jaime Alberto Aristizábal Gómez quien actúa como ponente, John Jairo Acosta Pérez y Francisco Arango Torres, procede a dictar sentencia de segundo grado, dentro del proceso ordinario radicado con el número 05001 31 05 019 2015 01302 01, promovido por la señora **LEIDY PAOLA CUESTA MOSQUERA**, en contra de los señores **LUIS ALBERTO PEREA ROMANA** y **MARLIN PATRICIA LLOREDA**, con la finalidad de resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la demandante frente a la sentencia emitida el 23 de abril de 2018 por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín.

De conformidad con el numeral 1º del artículo 13 de la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 “...Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones...” se toma la decisión correspondiente mediante providencia escrita número **247**, previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

ANTECEDENTES

La señora Leidy Paola Cuesta Mosquera demandó a los señores Luis Alberto Perea Romaña y Marlin Patricia Lloreda, pretendiendo se declare que entre las partes existió un contrato verbal de trabajo desde el 15 de junio hasta el 25 de agosto de 2014, el cual terminó por causa imputable a los empleadores estando en estado de embarazo, y que, en consecuencia, se ordene su reintegro al cargo desempeñado bajo las mismas condiciones. Así mismo que se condene a los demandados al reconocimiento y pago de los siguientes conceptos: 60 días de salario por concepto de indemnización y 12 semanas de descanso remunerado conforme lo previsto en el artículo 239 del Código Sustantivo de Trabajo; salarios causados hasta su reintegro; la suma de \$400.000 por concepto de cesantías y costas del proceso.

Como fundamento de sus pretensiones se expuso, que laboró al servicio de los señores Luis Alberto Perea Romaña y Marlin Patricia Lloreda desde el 15 de junio de 2014 desempeñando el cargo de mesera en el restaurante BIANCHAS en Niquia – Bello y posteriormente trasladada a Medellín y percibiendo un SMLMV. Aduce que fue despedida el 25 de agosto de 2014, tan pronto como los empleadores recibieron la respuesta positiva de la prueba de embarazo, sin que mediara permiso de la autoridad laboral competente. Agrega que el 7 de marzo de 2015 dio a luz a su hijo de nombre T.R.C.

Los señores Luis Alberto Perea Romaña y Marlin Patricia Lloreda en este juicio estuvieron asistidos por Curador *ad litem*, quien respondió la demanda de manera oportuna indicando que salta a la vista al revisar las pruebas allegadas por la demandante que la prueba de embarazo data del 22 de septiembre de 2014, la cual es posterior a la aludida en el escrito de demanda a saber: 25 de agosto de 2014, por lo que no resulta cierto que haya sido despedida en esta última fecha. Y aduce no constarle los demás hechos.

El codemandado Luis Alberto Perea Romaña se notificó personalmente del auto admisorio de la demanda el 19 de abril de 2019, con la advertencia de que actuaría de conformidad a la etapa procesal en la que se encontraba el trámite.

En sentencia proferida el 23 de abril de 2018, el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín, absolvió a los señores Luis Alberto Perea Romaña y Marlin Patricia Lloreda de las pretensiones de la demanda, y condenó en costas a la actora.

La Juzgadora de primera instancia, para fundamentar su decisión precisó que en este juicio le correspondía a la demandante probar la prestación personal del servicio, los extremos, el salario, la jornada y el despido; en tanto a la parte demandada le incumbía desvirtuarlo y haber obrado en cumplimiento de sus obligaciones como empleador. Que, no obstante, no quedó acreditada por lo menos la prestación personal del servicio, debido a la ausencia de prueba, ello, por cuanto la prueba documental allegada por la parte actora, a saber: la prueba de embarazo del 22 de septiembre de 2014 y los soportes de pago a seguridad social con fecha de septiembre y octubre de 2014, mismos que datan a una fecha posterior a la referida en la demanda como extremo final, esto es, el 25 de agosto de 2014, máxime que las afiliaciones a la seguridad social constituye un solo indicio de la relación laboral; la liquidación de prestaciones sociales sin firmas, las cuales no pueden refutarse como auténticos; y el registro civil de nacimiento, resulta en su totalidad insuficiente e irrelevante y no da cuenta para el despacho de la prestación personal del servicio , y por ende, de la existencia de la relación laboral entre las partes.

RECURSO DE APELACIÓN

El apoderado de la demandante considera que la decisión de primera instancia debe ser revocada. Primero, porque debe darse aplicación a la presunción legal establecida en el artículo 24 del Código Sustantivo de Trabajo en la medida que se demostró más allá de toda duda razonable que su representada si laboró al servicio de los codemandados. Segundo, porque la accionante citó a los

codemandados a conciliación extra judicial, y si bien no hubo acuerdo entre las partes; lo cierto es que la señora Lloreda en tal diligencia manifestó *“A Leidy no hubo despido a ella se le dijo que viniera sábados y domingos, no llamó, no avisó, hasta ahora es que vengo hablar con ella. Ella estaba con todas sus prestaciones, yo estaba desconociendo su estado de embarazo, tengo prueba de los mismos empleados que ella no volvió, no sé por qué, estamos consternados, en este momento le manifiesto y le ofrezco el reintegro a Bianchi como empleada, estoy tratando de conciliar”*, por lo que aceptó indubitavelmente con certeza y plenitud la relación laboral. Tercero, porque pese a como lo señaló la a quo no se probó el contrato de trabajo de manera categórica, la subordinación, el salario, ni la prestación personal del servicio, con lo dicho por la codemandada Marlin Patricia Lloreda ha de aplicarse la presunción legal ya referida. Cuarto, porque la afiliación a seguridad social en salud y pensión evidencia de manera clara su condición de trabajadora. Quinto, porque el documento que lleva el membrete y el logotipo del restaurante Bianchas, si bien no contiene firma de los empleadores; si da cuenta del pago de realizado en favor de la actora por concepto de prestaciones sociales y vacaciones por valor de \$147.213, además, no fue tachado, por ende, se le debe dar validez. Sexto, porque los extremos de la relación laboral se pueden constatar en el documento de liquidación de prestaciones sociales antes aludido y en las fechas en las cuales la accionante fue afiliada y retirada de la seguridad social. Y séptimo, porque expone el apelante que *“como mi mandante es una persona iletrada se haya equivocado en cuanto a las fechas que me dio para yo increpar la demanda, es posible que hayamos cometido ese error humano”*, no obstante, en materia laboral el juez tiene la facultad de fallar ultra y extra petita, a fin de establecer los extremos laborales.

Frente al recurso promovido por el apoderado de la demandante, la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, de conformidad los Artículos 15 y 66A del C.P.L y de la S.S., respectivamente.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

El apoderado de la actora allegó dentro del término legal escrito de alegatos de conclusión, precisando que su representada fue despedida en estado de embarazo

a sabiendas de sus empleadores, ya que ellos le mandaron a hacer la prueba de embarazo en el laboratorio clínico Guadalupe, siendo el único motivo de despido, prueba que data del 22 de septiembre del 2014. Que lo anterior se refuerza con el Registro Civil de Nacimiento del hijo de la actora, ocurrido el 7 de marzo del 2015. Que, si bien la liquidación de prestaciones sociales no tiene firma de los empleadores, si contiene el membrete del establecimiento de comercio “Restaurante Bianchas”, máxime que en la contestación no se presentó oposición frente a tal aspecto ni tacha de falsedad. Y que la prueba documental allegada, es decir, el documento referente a la liquidación de prestaciones, el certificado de registro mercantil, la consulta de empleados en Asopagos, la historia clínica de la accionante, la liquidación de prestaciones, el acta no conciliada y el registro civil de nacimiento del hijo de mi prohiada, refuerzan la existencia de la relación laboral.

PROBLEMA JURÍDICO

El problema jurídico de esta segunda instancia, consiste en determinar si entre las partes existió un contrato de trabajo desde el 15 de junio hasta el 25 de agosto de 2014, y si el mismo terminó por causa imputable a los empleadores estando la demandante en estado de embarazo, y si en consecuencia, le asiste derecho a la citada al pago de los siguientes conceptos: 60 días de salario por concepto de indemnización y 12 semanas de descanso remunerado conforme lo previsto en el artículo 239 del Código Sustantivo de Trabajo; salarios causados hasta su reintegro y la suma de \$400.000 por concepto de cesantías.

CONSIDERACIONES

En virtud del principio de la carga de la prueba o auto responsabilidad, consagrado en el artículo 164 y 167 del Código General del Proceso, aplicable por remisión normativa del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social. Las partes están obligadas a probar el supuesto de hecho de las normas jurídicas que consagran el derecho que reclaman, manteniendo la obligación de aportar los soportes en que se basan sus afirmaciones, con las


cuales pretenden se les reconozca un derecho, la aplicación de una norma, o un efecto jurídico particular, el no hacerlo conlleva inexorablemente a la negativa de éstos.

En desarrollo de tales preceptos normativos, la jurisprudencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia en sentencia del 25 de octubre de 2011, radicado 37547 sostuvo:

“...La Sala considera que el Tribunal no distorsionó el verdadero sentido de la regla de juicio de la carga de la prueba, contenida en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil –aplicable al procedimiento del trabajo y de la seguridad social, merced a lo dispuesto en el artículo 145 del estatuto de la materia-, porque la carga de la prueba del tiempo servido por el trabajador al empleador la soporta el primero, de modo que la falta de demostración del tiempo de servicios comporta que no hay posibilidad para condenar al pago de prestaciones, salarios e indemnizaciones...”.

Al proceso se allegó por la parte actora la siguiente prueba documental:

- Prueba de embarazo de 22 de septiembre de 2014, practicada en el Laboratorio Clínico Guadalupe.




LABORATORIO CLÍNICO
GUADALUPE

4

NOMBRE LEIDI PAOLA CUESTA MOSQUERA		FECHA SEP 22/2.014	
EDAD 20 AÑOS	SEXO F		
HEMATOLOGÍA		UROANÁLISIS	
HEMOGLOBINA	GRS	ASPECTO	
HEMATOCRITO		COLOR	
LEUCOCITOS	mm3	DENSIDAD	
NEUTROFILOS	%	PH	
EOSINOFILOS	%	PROTEINAS	
BASOFILOS	%	GLUCOSA	
LINFOCITOS	%	SANGRE OCULTA	
MONOCITOS	%	CUERPOS CETNICOS	
PLAQUETAS	mm3	BILIRUBINA	
SEDIMENTACIÓN: 1 HORA		UROBILINOGENO	
MORFOLOGÍA GLOBULAR		NITRITOS	
SEROLOGÍA		SEDIMENTO URINARIO	
GRUPO SANGUÍNEO	RH	CÉULAS BAJAS	
PRUEBA DE EMBARAZO	"POSITIVA"	CÉULAS ALTAS	
DIRECTO		LEUCOCITOS	
GRAM		ERITROCITOS	
		CRISTALES	
		BACTERIAS	
		MOCO	
		OTROS	
QUÍMICA SANGUÍNEA		COPROLOGICO	
GLICEMIA EN AYUNAS		CONSISTENCIA	
POSCARGA 1 HORA		PH	
POSCARGA 2 HORAS		AZÚCAR REDUCTORES	
UREA		SANGRE OCULTA	
CREATININA		HELMINTOS	
ACIDO ÚRICO		ASCARIS	
COLESTEROL TOTAL		TRICOCÉFALOS	
COLESTEROL HDL		UNCINARIAS	
COLESTEROL LDL		OXIURAS	
COLESTEROL VLDL		PROTOZOARIOS	
ÍNDICE C. T/HDL		E. HISTOLITICA PROTOZOITO	
TRIGLICÉRIDOS		E. HISTOLITICA QUISTE	
BILIRUBINA TOTAL		E. COLI QUISTE	
BILIRUBINA DIRECTA		E. NANA QUISTE	
OTROS		GUARDIA LAMELIA TROFOZOITO	
TSH		GUARDIA LAMELIA QUISTE	
		LEVADURAS	
OBSERVACIONES		ELABORACIÓN DIGESTIVA	
		ALMIDONES	
		GRASAS	
		LEUCOCITOS	
		ERITROCITOS	

FIRMA


Calle 44 No. 40 - 27 Tel. 214 43 36
Laboratorio Clínico Guadalupe

Calle 95A N° 40 - 27 Tel. 214 43 36

- Documento titulado *LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES* con logo y membrete de Charcutería y Restaurante Bianchas, sin firmas.



RESTAURANTE
BIANCHAS
NIT 8115311

LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE DEL EMPLEADO	LEIDY PAOLA CUESTA	
CEDULA DE CIUDADANIA		1028015039
DIAS LABORADOS		30
FECHA DE INGRESO		25/08/2014
FECHA DE RETIRO		25/09/2014
SALARIO		\$ 616.000,00
BASE PARA LIQUIDAR	\$	688.000,00
PRESTACIONES SOCIALES		
CESANTIAS PROPORCIONAL DEL AÑO	\$	57.333,33
INTERESES A LAS CESANTIAS	\$	6.880,00
PRIMA DE SERVICIOS PROPORCIONAL DEL SEGUNDO SEMESTRE 2014	\$	57.333,33
VACACIONES	\$	25.666,67
TOTAL DE LIQUIDACION	\$	147.213,33

Dejo expresa constancia que con este pago quedo a paz y salvo por todo concepto correspondiente a mis PRESTACIONES SOCIALES; ya que oportunamente no fueron canceladas las sumas a que he tenido derecho. Además hago constar que a la fecha gozo de perfecta salud, y que para que conste firmo el presente finiquito, cuya sola presentación será suficiente para inhibir cualquier reclamación que se hiciera o se intentare hacer en el futuro por cualquier percepción.

Firma de Recibido: _____
Cédula : _____

Firma de Empleador: _____
Cédula : _____

- Planilla de ASOPAGOS S.A. que da cuenta que la señora Marly Patricia Lloreda efectuó el 14 de octubre de 2014, en favor de la demandante un día de cotizaciones en salud y pensiones en los ciclos octubre y septiembre de 2014, respectivamente, con novedad de ingreso y retiro de la misma fecha.

CONSULTA EMPLEADO	
Razón Social: MARLY PATRICIA LLOREDA	
Identificación: CC-43638066	
Sucursal: 0	
Periodo Fecundación: 2014-09	
Periodo Salud: 2014-10	
Fecha Pago Planilla: 2014-10-14	

Tipo Identificación	
Número Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nombre	LEONOR ROSA CUESTA MOSQUERA
EPS	SAIUD TOTAL
AFP	FORVENER
Calidad de Compensación	COMPENSA ANTICUADA
AFP	POSITIVA
Número de Planilla	8694532344
Referencia de Asignación	ASU4944999
Tipo de Planilla	5
Periodo Censión	2014-09
Periodo Salud	2014-10
Tipo de cotizante	Dependiente
Subtipo de cotizante	No aplica

Rendimientos												
INC	RET	TCE	TAR	TAF	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP	TAP
X												0

Días Cotizados	
Pensión	
Salud	
Riesgo	
Caja de Compensación	

Modalidad Salario		ISC Pensiones	
ISC Salud	21,000	ISC Pensiones	21,000
ISC Caja	21,000	ISC Salud e INC	41,947
Salario	419,000		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES						
Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria	Total Cotización	Fondo de Sol. Pensional	Fondo de Subs. Pensionales	Valor no retenido aportes vol
16.98	3,400	0	3,400	0	0	0

SISTEMA GENERAL DE SALUD					
Tarifa	Cotización Obligatoria	UPC adicional	Autorización	Valor	Licencias de Maternidad
0.8400000	840	0		0	0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES					
Código centro de trabajo	Tarifa	Cotización Obligatoria			
1	0.8000000	110			

APORTES PARAFISCALES							
Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa CASAP	Aporte CASAP	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa Caja	Aporte Caja
0.0000000	0	0.0000000	0	0.0000000	0	0.0000000	0

Tipo Identificación		Cédula de Ciudadanía	
Número Identificación		1.029.615.039	
Nombre		RAUL ENDA CUESTA MOSQUERA	
EPS		SALUD TOTAL	
AEP		POPVENIS	
Caja de Compensación		COMPANA ANTIOQUIA	
AEP		PO-1215	
Número de planilla		869453344	
Referencia de pago (PIN)		869454649	
Tipo de planilla		A	
Período emisión		2014-03	
Período salud		2014-10	
Tipo de cotizante		Dependiente	
Subtipo de cotizante		No aplica	

Bonedades															
ING	SEY	TDR	VAR	TDP	TAF	VSP	VTE	VST	SIN	IOR	IMA	VAC	AVP	VCT	IRP
	X														0

Días Cotizados	
PENSIÓN	1
CAJAS	1
RIESGOS	1
Caja P.G. CONCORDACION	1

Modalidad Salario	Salario	IMC Pensión	21,000
IMC Salud	21,500	IMC Riesgos	21,000
IMC Cajas	21,500	IMC SENA o SERP	41,000
Salario	410,000		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES						
Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria	Total Cotización	Fondo de Ret. Funcional	Fondo de Subs. Pensional	Valor no retenido
16.0%	3,400	0	3,400	0	0	0

SISTEMA GENERAL DE SALUD					
Tarifa	Cotización Obligatoria	UPC adicional	Id. y Idem. R.C. No Autorización	Valor	Valor
0.6400003	840	0		0	0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES		
Código centro de trabajo	Tarifa	Cotización Obligatoria
1	0.0052000	110

APORTES PARAFISCALES							
Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa ICRP	Aporte ICRP	Tarifa Caja	Aporte Caja
0.0000000	0	0.0000000	0	0.0000000	0	0.0000000	0

- Historia clínica de la actora donde se evidencia que en consulta de control prenatal ginecología de 14 de enero de 2015 se señala un periodo de gestación de 32 semanas y 3 días, tercer trimestre.
- Documento en el cual se liquidan prestaciones sociales del 8, 15 y 22 de junio, del 6, 13 y 27 de julio y del 3 y 7 de agosto de 2014, y del 25 de septiembre al 16 de diciembre de 2014, sin firmas ni membretes.

CONCEPTOS	FECHA COMPRENDIDA ENTRE (Junio 8,15,22) (Julio 6,13,27) (Agosto 3,7)
CESANTIAS	\$ 45.628
INTERESES A LA CESANTIAS	\$ 1216
PRIMA	\$ 45.628
VACACIONES	\$ 6.844
TOTAL	\$ 99.316

CONCEPTOS	FECHA 25/09/2014 HASTA 16/12/2014
CESANTIAS	\$ 158.622
PRIMA	\$ 158.622
INTERESES A LAS CESANTIAS	\$ 4.388
VACACIONES	\$ 79.311
TOTAL	\$ 400.943

TERCERO: En virtud del pago de la suma convenida, se termina la relación laboral entre las partes a partir del 16 de diciembre de 2014, se cancela la totalidad de las prestaciones sociales a las que tiene derecho la señora **LEIDY PAOLA CUESTA MOSQUERA** como són cesantias, intereses a la cesantias, vacaciones y prima, en el primer periodo comprendido (desde el 8-15-22 de Junio de 2014, 6-13-27 de Julio de 2014, 03-07 Agosto de 2014) y el segundo periodo comprendido desde el día 25 de Septiembre de 2014 hasta el 16 de Diciembre de 2014).

- Acta no conciliada No. 1256 de 9 de diciembre de 2014, emitida por el Ministerio de Trabajo.
- Registro Civil de Nacimiento que da cuenta del nacimiento del menor T.R.C. el 7 de marzo de 2015, hijo de la demandante.

En criterio del apoderado judicial de la demandante debe darse aplicación a la presunción legal establecida en el artículo 24 del Código Sustantivo de Trabajo pues de las pruebas relacionadas, específicamente las planillas de afiliación a seguridad social, el documento de liquidación de prestaciones sociales y el acta de no conciliación se deriva la existencia de la relación laboral entre las partes.

La Sala no comparte lo expuesto por apelante por las siguientes razones.

En primer término, se tiene que el contrato de trabajo es un acuerdo celebrado entre dos partes, una de ellas denominada trabajador y otra empleadora, donde el primero presta personalmente sus servicios orientado bajo la subordinación hacia el segundo, y recibiendo una contraprestación denominada salario.

En aras de equilibrar la relación desigual entre las partes consecuente al poder subordinante del empleador, el legislador, consagró un mínimo de derechos y garantías, que propenden por el respeto a la dignidad del trabajador.

Para ello, el artículo 23 del Código Sustantivo de Trabajo, delimitó tres elementos para diferenciar el contrato de trabajo de otros que pudiera darse en el desarrollo de las relaciones humanas, así:

“...ARTICULO 23. ELEMENTOS ESENCIALES.

1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurren estos tres elementos esenciales:

a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;

b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen al país; y

c. Un salario como retribución del servicio.

2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen...”.

Por su parte, en el artículo 24 ibídem se precisa:

“...Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo...”.

Luego, se tiene que afirmado el vínculo laboral le corresponde al demandante acreditar los supuestos para la configuración del mismo en los términos del artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, siendo en principio relevante el referido a la prestación personal del servicio, la cual, definida en el artículo 5 de la misma norma, se trata de cualquier oficio, material o intelectual, desempeñado necesariamente por una persona natural. Es este punto el elemento diferenciador pues la prestación del servicio siempre debe ejecutarse por el trabajador de manera personalísima, sin que sea posible la sustitución de trabajadores, pues si se presenta lo contrario, será la prestación de un servicio, pero éste no será de naturaleza personal. Finalmente, dicha actividad debe beneficiar a un empleador, pues acreditado este entra a operar la presunción de contrato de trabajo contemplada en el artículo 24 ibídem, como una ventaja probatoria a favor de la parte más débil de la relación laboral, que puede ser desvirtuada por la contraparte, demostrando que se trata de una relación contractual diferente o que el mismo no se dio.

Lo anterior significa, conforme a la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia¹, que al demandante le basta con probar la prestación o la actividad personal para que se presuma el contrato de trabajo, y es a la parte demandada a quien le corresponde desvirtuar dicha presunción con la que queda beneficiado quien presta el servicio, lo que se traduce en un traslado de la carga probatoria, demostrando que la actividad contratada se ejecutó o realizó en forma autónoma, totalmente independiente y no subordinada, se itera, bajo un nexo distinto del laboral.

Ahora, es de advertir, que la presunción en comento, además de ser susceptible de ser desvirtuada, no releva a la parte actora de otras cargas probatorias, tales como acreditar los extremos temporales de la relación, el monto del salario, su

¹ Ver sentencias CSJ SL, 13 abr. 2010, rad. 34223; SL4027-2017, SL 365 de 2019 y SL2976-2020, Radicación n.º 68876 del 11 de agosto de dos 2020, entre otras.

jornada laboral, el trabajo en tiempo suplementario si lo alega, el hecho del despido cuando se demanda la indemnización por terminación del vínculo sin justa causa, entre otros. Al respecto indicó la Honorable Corte Suprema de justicia Sala de Casación Laboral, en sentencia del 6 de marzo de 2012:

“...recuerda la Corte que la circunstancia de quedar demostrada la prestación personal del servicio, debiéndose presumir la existencia del contrato de trabajo en los términos del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, no releva al demandante de otras cargas probatorias, pues además le atañe acreditar ciertos supuestos trascendentales dentro de esta clase de reclamación de derechos, como por ejemplo los extremos temporales de la relación, el monto del salario, su jornada laboral, el trabajo en tiempo suplementario si lo alega, el hecho del despido cuando se demanda la indemnización por terminación del vínculo sin justa causa, entre otros.

De antaño se ha considerado como principio universal en cuestión de la carga probatoria, que quien afirma una cosa es quien está obligado a probarla, obligando a su vez a quien pretende o demanda un derecho, que alegue y demuestre los hechos que lo gestan, o aquellos en que se funda, desplazándose la carga de la prueba a la parte contraria, cuando se opone o excepciona aduciendo en su defensa hechos que requieren igualmente de su comprobación, debiendo desvirtuar la prueba que el actor haya aportado como soporte de los supuestos fácticos propios de la tutela jurídica efectiva del derecho reclamado...”

Así lo ha reiterado dicha corporación en sentencias 36748 de 2009, SL 9156 de 2015, SL 11156 de 2017, SL 4912 de 2020 y SL 1430 de 2021 entre otras.

Es así como mínimamente, la trabajadora, en este caso la señora Leidy Paola Cuesta Mosquera, debe acreditar la prestación personal del servicio a favor de los señores Luis Alberto Perea Romaña y Marlin Patricia Lloreda, la cual, definida en el artículo 5 del Código Sustantivo de Trabajo se trata de cualquier oficio, material o intelectual, desempeñado necesariamente por una persona natural. Es este punto el elemento diferenciador pues la prestación del servicio siempre debe ejecutarse por el trabajador de manera personalísima, sin que sea posible la sustitución de trabajadores; pues si se presenta lo contrario, será la prestación de un servicio, pero éste no será de naturaleza personal. Finalmente, dicha actividad debe beneficiar a un empleador.

A propósito de la subordinación, es el sometimiento del trabajador a la esfera organicista, rectora y disciplinaria del empleador, donde la obediencia es la

premisa principal, siendo este elemento diferenciador de otro tipo de contrataciones, pues se caracteriza por ser irrenunciable e intransmisible.

La subordinación propia de las relaciones laborales es personal, pues el trabajador se somete a la persona del empleador, quien tiene la potestad para dar órdenes directas, implementar horarios y reglamentos internos, exigir permisos para ausentarse del lugar de trabajo, impartir sanciones disciplinarias ante el incumplimiento de las obligaciones contractuales, entre otras, a diferencia de los contratos de índole civil, comercial o administrativo, donde los contratantes se someten al cumplimiento de las obligaciones contraídas, y no a las personas.

Es importante recordar, que la doctrina ha reconocido ciertos indicios que pueden dar lugar a deducir la materialización de una relación laboral, tales como las condiciones locativas de la prestación del servicio, que generalmente serían dentro de la esfera del empleador; la existencia de un horario de trabajo, la ajenidad de los productos y los bienes producidos.

Finalmente, pero no menos importante, el servicio personal debe ser remunerado con una asignación que es pactada entre los contratantes y que tiene como fin retribuir la fuerza laboral impartida por el trabajador ante el empleador.

El beneficio probatorio que tiene el empleado como extremo vulnerable de la relación contractual, y que es por esta especialidad amparado, no le quita otro tipo de obligaciones procesales y probatorias, es decir, no basta con acreditar sólo la prestación personal del servicio para que se derive inevitablemente la prosperidad de sus pretensiones, sino que, también recae en él la obligación de crear certeza sobre los extremos de la relación laboral que se endilga y respecto a quién.

De igual forma, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral en su línea jurisprudencial, ha precisado los parámetros que permiten predicar si entre las partes existió relación laboral encubierta, o, por el contrario, se desarrolla una actividad de manera autónoma e independiente de naturaleza comercial.

En las sentencias SL 1439 de 2021 y SL 4479 de 2020 se analizó el alcance de la prestación del servicio sujeta a control y supervisión; en la SL 2585 de 2019 la disponibilidad del trabajador; en la SL 2555 de 2015 la aplicación de sanciones disciplinarias; en la SL 981 de 2019 la continuidad en la prestación del servicio; en la SL 981 de 2019 el cumplimiento de jornada y horario; en la SL 4344 de 2020 la prestación del servicio en locales lugares definidos por el empleador; en la SL 981 de 2019 el suministro de materiales para la ejecución de la labor.

La hermenéutica, de la presunción en comento, ha sido expuesta en forma coherente por la línea jurisprudencial de la Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, de vieja data. Basta mencionar la sentencia SL 1905 de 2018; SL 2480 de 2018, SL 686 de 2017, radicación 48.890 de 25 de enero de 2017, SL 878 de 2013, radicación 39.713 de 22 de octubre de 2013, y en la sentencia de radicación 42.167 de 6 de marzo de 2012, MP. Dr. Carlos Ernesto Molina Monsalve, donde se precisó la carga probatoria de la parte demandante en este tipo de procesos:

“...Como consideraciones de instancia, a más de las expresadas al estudiar el cargo, recuerda la Corte que la circunstancia de quedar demostrada la prestación personal del servicio, debiéndose presumir la existencia del contrato de trabajo en los términos del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, no releva al demandante de otras cargas probatorias, pues además le atañe acreditar ciertos supuestos trascendentales dentro de esta clase de reclamación de derechos, como por ejemplo los extremos temporales de la relación, el monto del salario, su jornada laboral, el trabajo en tiempo suplementario si lo alega, el hecho del despido cuando se demanda la indemnización por terminación del vínculo sin justa causa, entre otros...”

En relación con la carga probatoria atribuible a la parte demandante, de demostrar además de la prestación personal del servicio, los extremos temporales, reflexionó también la Corte Suprema de Justicia, Sala de Descongestión Laboral en la sentencia SL 309 de 2018.

En el asunto de autos se considera que no se arribó prueba alguna que acreditara, al menos, la prestación personal del servicio en los términos alegados, para, a partir de ese mínimo hecho, darle aplicación a la presunción del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo aludida, razón por la cual no hay elementos de juicio para declarar la existencia misma de la relación laboral.

A esa conclusión se llega de acuerdo a la prueba documental arrimada por la parte actora, que analizada en su conjunto conforme lo dispuesto en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social que le confiere al Juzgador la potestad de apreciar libremente las pruebas aducidas en el juicio para formar su convencimiento acerca de los hechos debatidos, con base en aquellas que lo persuadan mejor sobre cuál es la verdad real y no simplemente formal, se reitera, no da cuenta de que entre las partes hubiera existido una relación laboral como se pretende hacer valer.

En cuanto a lo aseverado por la parte actora respecto de que la afiliación a la seguridad social en salud y pensión evidencia de manera clara la condición de trabajadora de la accionante, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia SL 1116 de 23 de marzo de 2022, Radicado 89.546, reiteró lo dicho en la sentencia SL 21668 de 5 de febrero de 2009, Radicado 35.066 donde sostuvo:

“...Lo que sucede es que para el Juzgador de alzada, tal afiliación no es indicativo suficiente para declarar la presencia de un vínculo contractual de carácter laboral, lo cual resulta acorde con lo adocinado por esta Corporación sobre esta precisa temática, en el sentido de que dicha inscripción no implica per sé la celebración de un contrato de trabajo, ya que para ello se requiere de la voluntad de ambas partes y la concurrencia de los elementos esenciales previstos en el artículo 23 del Código Sustantivo de Trabajo, valga decir, la actividad personal del trabajador, la continuada subordinación o dependencia de éste respecto del empleador, y un salario como retribución de la prestación del servicio.

Al respecto, cabe traer a colación lo expresado por la Corte en sentencia del 10 de marzo de 2005 radicado 24313, en la que se dijo:

"(...) Y lo sostenido por el ad quem, en cuanto a que para cierta época aparezca afiliado el actor al ISS, no es suficiente para demostrar la existencia del contrato de trabajo al ser ello apenas un <mero indicio de ese tipo de vinculación>, no resulta un razonamiento equivocado, habida consideración que como lo ha reiterado la Corte de

tiempo atrás <...el hecho de la afiliación al seguro social, no demuestra por sí sólo el contrato de trabajo, pues para la estructuración de este, se requiere la coexistencia de los elementos del contrato de trabajo> (Sentencia del 18 de marzo de 1994, radicado 6261)...".

Como se indicó anteriormente, las planillas de ASOPAGOS S.A. dan cuenta que la codemandada Marly Patricia Lloreda efectuó el 14 de octubre de 2014, en favor de la demandante el pago un día (1) de cotizaciones en salud y pensiones en los ciclos octubre y septiembre de 2014, respectivamente, con novedad de ingreso y retiro de la misma fecha, lo cual no resulta indicativo de la existencia de un vínculo contractual de carácter laboral, máxime que dicho pago se realizó por fuera de los extremos señalados en la demanda.

Luego. Si bien fue allegado documento titulado *LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES* con logo y membrete de Charcutería y Restaurante Bianchas obrante a folios 30 PDF003, y documento en el cual se liquidan prestaciones sociales militante a folios 46 PDF003; lo cierto es que no se encuentra suscrito por ninguno de los codemandados.

Sobre el tema, el artículo 244 del Código General del Proceso aplicable por analogía en materia laboral consagra que es auténtico el documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito, firmado o cuando existe certeza respecto de la persona a quien se atribuye el documento, la norma señala:

“...ARTÍCULO 244. DOCUMENTO AUTÉNTICO. Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza respecto de la persona a quien se atribuya el documento.

Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en original o en copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen, se presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos, según el caso.

También se presumirán auténticos los memoriales presentados para que formen parte del expediente, incluidas las demandas, sus contestaciones, los que impliquen disposición del derecho en litigio y los poderes en caso de sustitución.

Así mismo se presumen auténticos todos los documentos que reúnan los requisitos para ser título ejecutivo.

La parte que aporte al proceso un documento, en original o en copia, reconoce con ello su autenticidad y no podrá impugnarlo, excepto cuando al presentarlo alegue su falsedad. Los documentos en forma de mensaje de datos se presumen auténticos.

Lo dispuesto en este artículo se aplica en todos los procesos y en todas las jurisdicciones...”.

Y el artículo 269 del mismo Estatuto Proceso prevé:

“...Tacha de falsedad y desconocimiento de documento. Procedencia de la tacha de falsedad. La parte a quien se atribuya un documento, afirmándose que está suscrito o manuscrito por ella, podrá tacharlo de falso en la contestación de la demanda, si se acompañó a esta, y en los demás casos, en el curso de la audiencia en que se ordene tenerlo como prueba. Esta norma también se aplicará a las reproducciones mecánicas de la voz o de la imagen de la parte contra quien se aduzca. No se admitirá tacha de falsedad cuando el documento impugnado carezca de influencia en la decisión. Los herederos de la persona a quien se atribuye un documento deberán tacharlo de falso en las mismas oportunidades...”.

La jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia frente a la autenticidad de la prueba documental, atañe con la certeza que se tiene de quien la suscribe, manscribe o elabora; que sobre el asunto la jurisprudencia ha explicado, por ejemplo, en la sentencia SL4813 de 2020, reiterando lo expuesto en las sentencias SL 14236 de 2015, SL 1847 de 2018 y SL 3326 de 2019, en relación con los artículos 252, 276, 289 y 292 del CPC, aplicables por la remisión normativa del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social, hoy artículos 244, 269 y 274 del Código General del Proceso, se precisó:

“...i) que por cualquiera de esas tres vías puede corroborarse la autenticidad de la prueba;

ii) que la misma debe ser examinada caso a caso, de acuerdo con las reglas probatorias o las circunstancias relevantes del juicio; así como también, con los signos de individualización que permitan identificar al creador de la probanza, por cuanto la firma no es el único elemento de adjudicación de autoría;

iii) que,

“[...] cuando el demandante aporta un documento como prueba de los hechos que alega en su demanda, y éste sostiene que está firmado, manuscrito o elaborado por la parte contra quien lo aduce, y aquella no se opone mediante el instrumento procesal respectivo, en el momento adecuado, procede el reconocimiento implícito o tácito”.

iv) que si se acude a una de esas formas de procedencia de los documentos (suscritos, manuscritos o elaborados), *“es factible su oposición, que si no se ejerce por la parte contra quien se aducen, reconocerá implícitamente con su silencio, la autenticidad...”.*

Mientras que, sobre la autenticidad de las copias documentales, se ha adoctrinado, entre otras en las sentencias SL de 1º febrero de 2011, radicado 38.336; SL 683 de 2013; SL 6484 de 2015 y SL 2811 de 2016, que es un tema regulado en el artículo 54 A del Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social, que no admite la remisión del artículo 145 del CPTSS a la norma adjetiva civil y que impone una presunción de autenticidad.

En efecto, respecto del tema ha puntualizado la Corporación mencionada, que cuando los documentos son presentados por las partes con fines probatorios y existe certeza de quien lo elaboró, *“lo que sigue es reputarlos auténticos”*, según se indicó específicamente en la sentencia SL 6484 de 2015, pues la eliminación del requisito de autenticación del artículo 24 de la Ley 712 de 2001, trasladó a la parte contra la cual se aduce, la carga de tacharlos o desconocerlos, en ejercicio de los principios de contradicción y publicidad de la prueba.

En conclusión, en materia laboral y de seguridad social, por virtud de las normas procedimentales civiles aplicables y la del estatuto propio, como se anotó en la sentencia SL 4813 de 2020 *“los documentos o sus reproducciones, presentados por las partes con fines probatorios, se reputan auténticos, sin necesidad de presentación personal, siendo las excepciones, aquellos que emanan de terceros o cuando se traten de hacer valer como título ejecutivo”*.

Conforme lo anterior, un documento puede ser aportado en juicio incluso en copia simple y se presumirá auténtico. No obstante, dentro de lo que se enmarca la práctica judicial el operador jurídico está facultado para realizar la valoración respecto a esa prueba al interior del proceso junto a todos los medios probatorios que contempla la ley buscando determinar el concreto valor que se le debe otorgar al medio de prueba en la reproducción de la certeza.

Corolario a ello, la presunción de autenticidad, debe armonizarse con lo dispuesto en el artículo 166 del Código General del Proceso, según el *“...cual las presunciones establecidas por la ley serán procedentes siempre que los hechos en que se funden estén debidamente probados. El hecho legalmente presumido se tendrá por cierto, pero admitirá prueba en contrario cuando la ley lo autorice...”*.

En el asunto de autos pese a que los documentos aportados uno titulado: *LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES* con logo y membrete de Charcutería y Restaurante Bianchas obrante a folios 30 PDF003, y otro en el cual se liquidan prestaciones sociales militante a folios 46 PDF003 no fueron tachados; en criterio de la Sala, valorados en conjunto con la demás prueba documental arrimada generan duda sobre su autenticidad y no llevan a esta Superioridad al convencimiento de los hechos aludidos en el líbelo relacionados con la presencia de un vínculo laboral entre las partes, dado que aparte de que no existe certeza de quien los elaboró, y menos se encuentran suscritos y/o firmados; refieren a extremos diferentes a los alegados por la parte actora, por lo que hay lugar a restarles mérito probatorio.

De otro lado, aduce el apelante que *“es posible que hayamos cometido ese error humano”* en lo que respecta a los extremos referido en el escrito de demanda.

Al respecto. Ha de recordarse que la demanda constituye la causa, la razón por la cual se ruega el derecho, los motivos que se tienen para pedir al Estado determinada sentencia, que por disposición del artículo 25 del Código Procesal del Trabajo, deben aparecer expresados en todo el escrito demandatorio, y surgen de los hechos del mismo, por cuanto del análisis de ellos versa la parte resolutive de la sentencia.

Adicionalmente, ha de considerarse que la Sala de Casación Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia, ha señalado que es base esencial del debido proceso laboral, que las sentencias se enmarquen en las pretensiones impetradas por la parte actora y, además, que tales resoluciones se acoplen a la causa petendi invocada por el promotor del proceso, puesto que las pretensiones, si bien delimitan los términos exactos del litigio a resolver, están conformadas por razones de hecho y de derecho (Sentencia SL 911 de 9 de febrero de 2016, Radicado 53.019).

Conforme a lo decidido por el Alto Tribunal en mención, acorde al viejo aforismo *“dadme los hechos y yo os daré el derecho”*, le corresponde al juez al resolver el litigio a partir de los hechos acreditados en el plenario, subsumirlos en la norma que consagra el derecho en discusión, dado que conforme al mandato superior del artículo 230 constitucional, los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley.

Aunado a lo anterior, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha adocinado que la demanda es el escrito mediante el cual se ejerce el derecho subjetivo público de acción, es decir, se formula a la Rama Judicial del Estado la petición de que administre justicia y con tal fin decida sobre las pretensiones contenidas en ella, a través de un proceso. La demanda es la base, junto con la contestación del demandado, para el desarrollo del proceso judicial por los sujetos del mismo, o sea, el juez, las partes y los intervinientes, y, por tanto, la base para dictar la sentencia que pone fin al proceso, y tiene legalmente efectos jurídicos importantes, como son, entre otros, la interrupción de la prescripción o la inoperancia de la caducidad, la radicación de la competencia en un determinado

funcionario y la consonancia de la sentencia (Sentencia C-1069 de 3 de diciembre de 2002).

En lo que tiene que ver con las facultades ultra y extra petita ha dicho la Sala de Casación Laboral que tales decisiones son exclusivas de los jueces de única y primera instancia, los jueces de segunda instancia no están habilitados para declarar ese tipo de condenas, sin embargo, sí pueden confirmarlas, modificarlas o revocarlas, máxime si se trata de derechos mínimos e irrenunciables del trabajador.

En las sentencias de 27 julio de 2000, Radicado 13.507, SL 14.022 de 2015 y SL 2808 de 2018 precisó: i) que la congruencia de una decisión judicial no significa que ésta deba ser un calco de las excepciones o pretensiones, pues bien puede ocurrir que la solución jurídica, resultante del examen fidedigno y sin alteración de los hechos y con respaldo en el ordenamiento normativo, sea distinta a la propuesta por el demandante y, ii) que, se insiste, el uso de las facultades ultra y extra petita por parte del primer Juez, constituyen una excepción a dicha regla, instituida para proteger, como lo explicó la Sala en las sentencias de 19 agosto de 2012, Radicado 40404 y SL 3933 de 2018, los derechos mínimos e irrenunciables del trabajador o afiliado.

Por su parte, en la sentencia SL 2808 de 2018 la Corporación explicó que "dichas facultades radican en cabeza de los jueces laborales de única y de primera instancia, y el Juez de segundo grado, en principio, no puede hacer uso de ellas, salvo cuando se trate de derechos mínimos e irrenunciables del trabajador, siempre y cuando (i) hayan sido discutidos en el juicio y (ii) estén debidamente probados, conforme lo dispuesto en la sentencia C-968 de 2003 y tal y como lo ha señalado la Corte en forma reiterada desde la providencia SL 5863 de 2014".

La demanda que dio origen a este proceso se instauró en contra de los señores Luis Alberto Perea Romaña y Marlin Patricia Lloreda, pretendiendo se declare que entre las partes existió un contrato verbal de trabajo desde el 15 de junio hasta el 25 de agosto de 2014, el cual terminó por causa imputable a los

empleadores estando en estado de embarazo, y que, en consecuencia, se ordene su reintegro al cargo desempeñado bajo las mismas condiciones. Y se condene a los demandados al reconocimiento y pago de los siguientes conceptos: 60 días de salario por concepto de indemnización y 12 semanas de descanso remunerado conforme lo previsto en el artículo 239 del Código Sustantivo de Trabajo; salarios causados hasta su reintegro; y la suma de \$400.000 por concepto de cesantías.

Luego, el Juzgador de primera instancia, resolvió en derecho atendiendo a las súplicas de la demanda inicial y a la causa petendi de ésta, respetando el principio de congruencia establecido en el artículo 281 del Código General del Proceso

En relación al contenido del acta no conciliada expedida el 9 de diciembre de 2014 por el Ministerio de Trabajo, precisa la Sala que la conciliación como mecanismo de resolución extrajudicial de resolución de conflictos aparte de que no constituye requisito de procedibilidad en materia laboral, se caracteriza por la voluntariedad de las partes para llegar a la solución de su controversia, pues son ellas, ayudadas por un conciliador que no tiene una facultad decisoria, quienes presentan las fórmulas de acuerdo con las que se espera poner fin a sus divergencias. Bajo estas acepciones son las partes las que en ejercicio de su libertad dispositiva deciden voluntariamente si llegan o no a un acuerdo, conservando siempre la posibilidad de acudir a la jurisdicción, es decir, a los órganos del Estado que constitucional y permanentemente tienen la función de administrar justicia para que en dicha sede se resuelva el conflicto planteado.

En consecuencia, y toda vez que entre las partes no se presentó un acuerdo conciliatorio vertido en un documento que por imperio de la ley hace tránsito a cosa juzgada, presta mérito ejecutivo y, por ende, obligatorio para éstas, no merece el acta de no conciliación referida por el apelante valoración probatoria alguna, lo que implica que las manifestaciones allí expresadas no pueden ser tomadas como pruebas.

Al respecto en la sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Honorable Corte Suprema de justicia del 3 de noviembre de 2010, bajo radicación 37936, expuso:

“Ahora bien, la posición de la Sala en torno a la acusación planteada por la censura, se encuentra contenida en la sentencia del 26 de mayo de 2000, radicación 13400, en que se apoya la acusación, y en la que claramente se define que no constituyen confesión, ni pueden ser esgrimidas como tal, las afirmaciones hechas por las partes durante una audiencia de conciliación, dentro del juego de las ofertas y contrapropuestas, sobre los hechos y razones que fundamentan sus distintas posiciones para reclamar o rechazar un determinado derecho, pues, de otro modo, se haría imposible toda negociación ante el temor suscitado entre las partes de comprometer su reclamación o excepción, en caso de no lograrse acuerdo”. Decisión está referida en la sentencia SL 175 de 2021 por parte de la sala de Descongestión Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Así las cosas, en el presente evento la demandante no cumplió con la carga probatoria antes referida, razón por la cual se debe confirmar la decisión absolutoria que se revisa en apelación.

DE LAS COSTAS

Ante la desventura del recurso de apelación, las costas en ambas instancias corren en favor de los señores Luis Alberto Perea Romaña y Marlin Patricia Lloreda y a cargo de la señora Leidy Paola Cuesta Mosquera.

Se fijan las agencias en derecho, en la suma total de \$1.160.000, para esta instancia.

Así las cosas, se confirmará la decisión absolutoria que se revisa en apelación, por las razones expuestas.

En mérito de lo expuesto, la **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve:

PRIMERO: Confirmar la sentencia de primera instancia proferida el 23 de abril de 2018 por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín que se revisa en apelación, por las razones expuestas.

SEGUNDO: Ante la desventura del recurso de apelación, las costas en ambas instancias corren en favor de los señores Luis Alberto Perea Romaña y Marlin Patricia Lloreda y a cargo de la señora Leidy Paola Cuesta Mosquera.

Se fijan las agencias en derecho, en la suma total de \$1.160.000, para esta instancia.

Lo resuelto se notifica en **EDICTO**. Se ordena regresar el proceso al Juzgado de origen.

Los Magistrados,

Jaime Alberto Aristizábal Gómez

John Jairo Acosta Pérez

Francisco Arango Torres

Firmado Por:

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Código de verificación: **9ffff36ebaabf8f29c4db67a2dd3d0547fe4fc1376fe57ddb73786b1822be8bb**

Documento generado en 02/08/2023 03:24:36 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>